



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 14-33 Piso 6°
cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

RADICADO: 110014003009-2022-00050-00

Bogotá, cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992

Accionante: **YOSELIN DEL CHIQUINQUIR CHOURIO RODRÍGUEZ**, quien actúa a través de apoderado judicial

Accionado: **ALLISON SALAZAR PACHÓN – PEPES'S PIZZA SAN JOSE**

Providencia: Fallo

ASUNTO

Procede este Despacho a resolver la acción de tutela propuesta por **YOSELIN DEL CHIQUINQUIR CHOURIO RODRÍGUEZ**, quien actúa a través de apoderado judicial en contra de **ALLISON SALAZAR PACHÓN – PEPE'S PIZZA SAN JOJE** con motivo de la supuesta violación a los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición artículo 23 Constitución Política de Colombia, radicado día 22 de noviembre de 2021.

ANTECEDENTES

Relata la parte actora que el día 22 de noviembre de 2021 radicó Derecho de petición ante la señora **ALLISON SALAZAR PACHÓN** en su calidad de representante legal de **PEPE'S PIZZA**, mediante el cual solicitó:

“PRIMERO. Expedir y hacer entrega de certificación laboral a nombre de mi poderdante, en donde se evidencie:

- *Extremos temporales de la relación laboral.*
- *Cargo desempeñado.*
- *Funciones desempeñadas.*
- *Lugar o lugares en donde desempeñaba las funciones.*
- *Salario devengado.*
- *Horario de trabajo.*
- *Jefe inmediato.*

SEGUNDO. Remitir copia de los siguientes documentos respecto de mi mandante, a saber:

- *Contrato de trabajo.*
- *Otrosíes suscritos.*
- *Planillas completas del control de horario laboral.*
- *Soportes de pago de nómina.*
- *Soportes de consignación de cesantías al fondo correspondiente.*
- *Soportes de afiliación y pago mensual al Sistema Integral de Seguridad Social.*
- *Soportes de pago de prestaciones sociales, vacaciones e intereses a las cesantías.*

TERCERO. Indicar los motivos por los cuales se da por terminado el contrato de trabajo con mi mandante.

CUARTO. Indicar los motivos por los cuales mi mandante no fue afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social.

QUINTO. Sírvase a pagar la totalidad de los dineros adeudados a mi mandante por concepto de auxilios de transporte.

SEXTO. Sírvase a pagar la totalidad de los dineros adeudados a mi mandante, derivados de la relación contractual sostenida, de conformidad con la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, intereses a las cesantías e indemnizaciones, adjunta al presente escrito.

SÉPTIMO. De no ser posible lo anterior, explique de manera escrita, clara y detallada, las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la negativa.

OCTAVO. En caso de no reconocer la relación laboral con mi poderdante, indique entonces qué tipo de relación contractual tenía con él y durante qué periodo tuvo vigencia, lo anterior, de forma escrita.

Agregó que no ha recibido respuesta alguna.

ACTUACIÓN PROCESAL

Se admitió la tutela y se requirió a la accionante para que en el término de 01 día, aportara prueba sumaria del derecho de petición enviado a **ALLISON SALAZAR PACHÓN - PEPE'S PIZZA SAN JOSÉ**. Para lo cual dio cumplimiento.

Se vinculó a **PEPE'S PIZZA SAN JOSÉ**.

La accionada no se pronunció ante los hechos.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico.

De conformidad con los hechos esbozados anteriormente, este Despacho entra a determinar si la entidad demandada desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de petición de **YOSELIN DEL CHIQUINQUIR CHOURIO RODRÍGUEZ**, respecto a la solicitud del 22 de noviembre de 2021.

2. Marco jurídico de la decisión.

2.1. La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de un particular, que preste “un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado subordinación o indefensión” (Ib.), y no se cuente con otro mecanismo judicial para su salvaguarda.

Por esta razón, la finalidad última de esta acción constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que se configure la amenaza que sobre él se cierne.

2.2. El derecho fundamental de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual reza:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

En desarrollo de esa garantía, la ley 1755 del 30 de junio de 2015 establece reglas para el ejercicio del derecho de petición que deben observarse por la administración y todas las personas que hagan uso de ese mecanismo. Mediante esta ley el Legislativo introdujo importantes modificaciones a los artículos 13 a 33 de la primera parte de la ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, el artículo 14° de la ley 1755 de 2015 estatuye: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.

Es claro anotar para lo presente en el caso, que la ley mencionada requiere bajo su objeto que las personas tienen derecho “a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. Por lo cual, respuestas de forma indebida y que carezcan de formalidades y fundamentos no pueden considerarse como satisfecha las solicitudes del peticionario.

Al referirse a este derecho, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterada en el sentido de señalar que no se agota y cumple con “cualquier respuesta”, sino que la respuesta debe ser clara, oportuna, concreta y de fondo de manera que siendo la decisión positiva o negativa a lo solicitado, definitiva el asunto objeto de la petición.

En Sentencia T-831A/13 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la respuesta a los derechos de petición puede ser favorable o no para el peticionario, y en todo caso (i) debe ser reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en conexidad con la garantía de otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma oportuna, esto es, dentro del término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una respuesta de fondo respecto de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y congruente; (iv) como ya se indicó en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al peticionario; y (v) se aplica por regla general a entidades públicas pero también a organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

Por tanto, puede concluirse que el derecho de petición tiene un “núcleo fundamental” [que] está constituido por: i) el derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa y, ii) la pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada esta garantía si la administración omite su deber constitucional de dar solución oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración” (T-237 de 2016).

Ahora bien, el Decreto 491 del 28 de marzo de 2.020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en su artículo 5 estableció:

“Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

2.3. El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, estipula la presunción de veracidad sobre los hechos de una acción de tutela en los casos que no se rinda el informe requerido:

“Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”

3. Hechos relevantes probados.

En lo medular, la presente acción plantea un inconformismo de **YOSELIN DEL CHIQUINQUIR CHOURIO RODRÍGUEZ**, al no brindársele una respuesta a su pedimento del 22 de noviembre de 2021 remitido mediante correo certificado a **ALLISON SALAZAR PACHÓN - PEPE'S PIZZA SAN JOSE**.

4. Análisis del caso.

El inconformismo de la parte demandante deviene, en que hasta la fecha de la presentación de la acción no ha recibido respuesta a su solicitud de fecha 22 de noviembre de 2021.

Ahora bien, la entidad accionada guardó silencio, por lo que se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1.991, es decir, se tendrán por ciertos los hechos alegados por la tutelante, con la consecuencia relevante de tener por cierto el hecho afirmado en la demanda sobre la ausencia de una respuesta de forma real, concreta y material de la entidad accionada respecto a lo solicitado.

Recuérdese que la jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”. (C. Const. Sent. T – 206/18).

Así las cosas, frente al incumplimiento por parte de **ALLISON SALAZAR PACHÓN - PEPE'S PIZZA**, se concederá el amparo suplicado, para que le entregue una respuesta clara, congruente y consecuente a la petición elevada por la accionante el 22 de noviembre de 2.021.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de **YOSELIN DEL CHIQUINQUIR CHOURIO RODRÍGUEZ**, por lo arriba expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior a **ALLISON SALAZAR PACHÓN - PEPE'S PIZZA SAN JOSE**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta determinación, le entregue una respuesta clara, congruente y consecuente a la petición elevada por el accionante el 22 de noviembre de 2.021.

TERCERO: Notificar a las partes la presente decisión. Ordenar que por secretaría se libren las comunicaciones de ley.

CUARTO: Remitir este fallo si no fuere impugnado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE,

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Luz Dary Hernández Guayambuco'.

LUZ DARY HERNÁNDEZ GUAYAMBUCO
Juez